

Miguel Angel Granados Chapa

El enemigo interno. La novedad en los últimos días es el activismo del enemigo interno del gobierno. No sólo sus aliados se vuelven contra él, como en San Luis Potosí, sino que ahora hasta algunos de sus propios integrantes protagonizan una rebelión contra los mandos políticos del sistema. El ataque proviene de rumbos dispares, pero el resultado es el mismo: debilitamiento y descrédito gubernamental.

El miércoles 8, un saludo ritual de principio de año al Presidente de la República convirtió a Palacio Nacional en escenario de un extraño, inesperado episodio en que los dirigentes del sindicato petrolero rompieron una larga etapa de avenimiento con la dirección de Pemex y sorpresivamente la pusieron en entredicho. Fue obvio que se trataba sólo de un pretexto para un planteamiento político de más largo alcance, cuya naturaleza y propósitos últimos no quedan claros ni siquiera para los afectados, que se limitan por ahora a colocar lienzos embebidos en árnica en el sitio donde el golpe inopinado, *descontón* se le llama en los ámbitos de la rijosidad popular, que dejó una zona tumefacta y dolorida.

Un observador menos acostumbrado a encontrar significados ocultos en los acontecimientos en que toma parte la dirección del sindicato petrolero tal vez debiera suponer que se trató de un abrupto o un deslíz de alguien poco ducho en sutilezas y aun en la mera articulación de un mensaje político, como lo es José Sosa, cuya presencia en la secretaría general del SRTPRM sirve de parapeto al verdadero liderazgo de Joaquín Hernández Galicia. Una comprobación adicional de esta observación simplista se tendría en lo que ocurrió por la tarde de ese mismo día, en el auditorio Colono del edificio principal de Pemex, donde Fernando Carbajal, el dirigente seccional de Salamanca, dijo al director de Pemex, Mario Ramón Beteta, exactamente lo contrario de la acusación proferida horas antes por Sosa ante el Presidente de la República, y hasta concluyó con una entusiasta muestra de apoyo. No era que el sindicato hubiera caído en la esquizofrenia, o que hubiera resuelto rectificar muy poco tiempo después un grave error. El discurso del líder salamantino era sólo una nueva cortina de humo, pues al día siguiente dirigentes seccionales de casi todo el sindicato, auspicados por Salvador Barragán Camacho ratificarían la denuncia formulada ante el Presidente, así como la ominosa advertencia lanzada por Sosa ante De la Madrid, y a la que el Presidente eligió dar una apresurada e inconsulta, pero vigorosa respuesta verbal, a la que deberán seguir acciones en sentido semejante.

Es infinito el elenco de posibilidades que explicarían la actitud de los dirigentes petroleros. Una de ellas recuerda que estando por resolverse las gubernaturas de Tamaulipas y Veracruz, donde el grupo de Hernández Gali-

PLAZA DOMINICAL



PEMEX ■ Rocha

cia sitúa sus principales intereses, el desafío lanzado al Presidente —porque si éste habló de discrepar lo que Sosa había hecho frente a él, en términos de la cultura presidencialista en que vivimos, había sido increparlo— tendría el propósito de recordar que esos intereses deben quedar salvaguardados cualquiera que sea el sentido de la decisión. No parece una hipótesis creíble esta, porque se aprecia una notoria desproporción entre el fin y el medio y porque puede discutirse y negociarse el tema de ámbitos menos públicos, con garantía de mayor eficacia.

Tiene, en cambio, más sentido suponer que el sindicato reconoció en la actual situación el momento adecuado para presionar al gobierno en pos de recuperar antiguas posiciones, como la que le entregaba contratos de perforación. Hoy los tiene todavía, pero debe someterse a concurso, lo que ha reducido el porcentaje de su participación. Actualmente están en vigor unos 200 contratos de ese tipo, de los que el sindicato debería disponer del 50 por ciento. En vez de 100, ejerce sólo 14. El quebranto económico que eso significa y el efecto de demostración derivado de esa medida, que exhibe como afectable al grupo de dirección sindical que debe absorber el golpe, serían deudas que ahora el *quinismo* (que como hemos dicho se escribe con *qu* pero podría perfectamente escribirse con *ce* y diría lo mismo) siente llegada la hora de cobrar.

El gobierno, en efecto, pasa por uno de sus momentos más críticos así en el orden financiero y económico como en el político. Ha perdido, si lo tuvo alguna vez, el asentimiento que nace si no de la solución de problemas agudos como los que padece la sociedad mexicana, al menos de su comunión con ella. La carestía de todo y el autoritarismo han provocado desazón generalizada y, en algunos puntos del país, movilizaciones enfrentadas con violencia. Es, según el cálculo visible tras esta acción que

comentamos, la hora indicada para negociar con el gobierno desde una posición de fuerza, la restitución de antiguos espacios de poder y la concesión de otros nuevos.

Es también probable que el episodio del 8 de enero esconda un lance de futurismo presidencial. Si es así, la víctima sería el director de Pemex, quien desde esa posición o como secretario de Estado es uno de los posibles sucesores de su antiguo amigo Miguel de la Madrid. Este fue impulsado hacia diversos cargos por Beteta, desde hace un cuarto de siglo en que se encontraron en el Banco de México. De la Madrid está ahora en condiciones de devolver el apoyo que durante mucho tiempo recibió del hoy director de Pemex. El temor de que la figura de éste se descarara explica la premiosa necesidad que experimentó el Presidente por salir al paso de las denuncias de Sosa. Si, como es visible, el grupo conservador-financiero que está en el poder se esforzará al máximo por no abandonarlo, Beteta es un precandidato de mayor fuerza que ningún otro en esa corriente.

No sólo desde los bajos fondos sindicales se impugna esta semana la autoridad del gobierno. Aunque no expresamente sino con la suavidad de formas que corresponde a los banqueros, éstos asestaron sin embargo un jaque al gobierno del que forman parte y al que deben solidaridad. Media docena de instituciones bancarias, las más poderosas, resolvieron declarar la guerra a los depositantes semipobres, y echarlos del mercado o arrinconarlos en las sociedades de crédito más pequeñas, para que hubiera así estricta correspondencia entre la importancia de las personas y la de sus bancos. Ahora habría una banca para los semipobres (los pobres no tienen más banco, cuando mucho, que el Monte de Piedad) y banca para muy ricos.

Ese era un propósito, al parecer, secundario. Pareciera que la decisión de cobrar por servicios hasta ahora gratuitos, se hubiera sin embar-

go planteado objetivos de más largo alcance. Por lo menos sus resultados fueron de esa naturaleza. La cancelación de cuentas, aun en las instituciones que no estaban haciendo esos cobros, y la irritación generalizada por lo que se considera un abuso y una nueva muestra de la ineficacia administrativa del gobierno, así como el repunte del dólar en el mercado cambiario, son golpes a la credibilidad gubernamental, es decir, atentados políticos contra el gobierno, procedentes de sus propias filas. Mañana la Comisión Nacional Bancaria o de Seguros o la Subsecretaría de la Banca hará recular a la Asociación Mexicana de Bancos, y cesará el cobro excesivo. Pero el daño está hecho, con lo que se allana el camino para que un día no muy lejano, en medio del beneplácito general, pueda el gobierno devolver la banca a sus legítimos propietarios, como les gusta todavía decir a quienes perdieron en septiembre de 1982.

San Luis Potosí fue escenario de otra acción del enemigo interno. Es alto el grado de probabilidad de que el gobierno local hubiera dispuesto realizar acciones atribuibles a la oposición, como la provocación en la Plaza de Armas durante la mañana del primero de enero o la quema del palacio municipal, al atardecer del mismo día. He tenido ocasión de ver el videotape del noticiero local en que consta parte de esos hechos. La provocación y la represión son notorias. Sólo a irresponsables y provocadores se les ocurre llevar niños a apedrear o lanzar proyectiles infamantes contra el palacio municipal. Por ello no fue difícil infiltrar entre los desaprensivos manifestantes navistas a quienes propiciaron después el agresivo contragolpe de los agentes policiacos.

La protesta municipal potosina ha producido consecuencias. Se ha iniciado el juicio político contra el gobernador, que quizá conduzca al alejamiento del alcalde repudiado por los navistas. El líder del PSUM, Pablo Gómez, fue el único presidente de partido nacional que acudió a la concentración ciudadana el lunes 6, en San Luis. Su presencia ha sido criticada, con razón, aun en círculos internos de su partido, porque no es sana la confusión entre sus propósitos y los del navismo, aunque ambos se denominen democratizadores.

Martín Vega Cazares, Manuel García Alonso, Antonio Álvarez y Jesús Ricardo Ramos González, camarógrafos, lograron para el canal 13 de San Luis un documento de excepcional valor informativo. Lo transmitió y comentó en el noticiero *Hoy informativo* el periodista Juan José Rodríguez. En vez del premio que su trabajo debiera haberles generado, hoy tienen el desempleo por toda recompensa. Presiones de origen inequívocamente gubernamental, y compromisos de la televisora en que laboraban los llevaron a todos a renunciar. Y es que existen todavía quienes suponen que se puede engañar todo el tiempo a todos, silenciando lo que ocurre, y hallan quien los acabe.